

Fecha de clasificación: Acuerdo CT/UT/PJECH/AC/13-2017 de fecha 26 de abril de 2017.

Área: Jurisdiccional

Identificación del documento: Resolución que se emite en proceso o procedimiento seguido en forma de juicio.

Razones que motivan la clasificación: Versión pública del documento para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Periodo de reserva: No sujeta a temporalidad alguna.

Fundamento legal: Artículos 117, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

Información confidencial: Datos personales marcados con **** (asteriscos) en el cuerpo del documento.

CIUDAD JUÁREZ, DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, CHIHUAHUA, VEINTISÉIS DE
MAYO DE DOS MIL DIEZ. -----

Para efecto de individualizar las penas que se han de imponer al infractor de la ley, debemos dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 65, 66, 67 y 68 del Código Penal, así tenemos, como datos que benefician al acusado, quien a decir de ****, contaba con 22 años de edad, cuando inició la relación sentimental con la pasivo, lo que nos conduce a concluir que es una persona relativamente joven, y por ello susceptible de obtener el fin último de la pena, que lo es, atento a lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Federal y el numeral 131 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la reinserción social, previo tratamiento penitenciario; además, no se demostró que el acusado registrara antecedentes penales, por lo que debe considerársele infractor primario, y por tanto, se asume, que antes del evento tenía una vida ordenada. Más aun, dio datos que condujeron al esclarecimiento del hecho, ya que a la madre de la víctima, le dijo donde había tirado el cuerpo de ésta. Siendo que de la resolución emitida por los superiores en el toca C 04/2010, se colige, como datos que le perjudican al imputado, que fue la persona que directamente ejecutó el evento luctuoso, pues se le sentenció condenatoriamente como autor material del hecho; que con la víctima tenía una relación sentimental, con quien procreó una hija, por lo que debemos entender, que el acusado, con su actuar, vulneró la fe y seguridad que tácitamente nace de un vínculo como el descrito, pues la experiencia nos ha enseñado que generalmente, las personas que procrean hijos tienden a proteger a éstos y a las personas con quienes los engendran; además, atento al género, debe decirse que la pasivo era del sexo femenino y de una edad considerada joven, resultando relevante esta última circunstancia, ya que se dio muerte a quien apenas estaba en sus inicios de una posible vida laboral y social. Así mismo, en cuanto a las

circunstancias de ejecución del evento, los Superiores tuvieron por demostrado que era mayormente probable que la pasivo hubiera fallecido por contusiones propinadas en la cabeza, además de que había prueba irrefutable de que la víctima fue incinerada después de su deceso, lo que denota, a juicio de este Órgano Colegiado, no solo el desprecio por el bien jurídico de mayor valía, que lo es la vida humana, sino el ánimo del activo por desvanecer cualquier vestigio del delito, lo cual se hace mayormente patente, si atendemos a que los escasos restos óseos recuperados, fueron encontrados en un tiradero clandestino. Más aún, ****, dijo haber tenido conocimiento de que los perros se llevaban restos que se encontraban en el tiradero, a la casa de su amos, y al realizarse el rastreo del cuerpo de la víctima, no había datos que revelaran que ésta fue enterrada, lo que indica que el acusado realizó actos que atentan contra la dignidad de los seres humanos, pues como se ha dicho, no solo quemó el cuerpo, sino que, en lugar de inhumarlo, lo dejó a merced de cualquier animal que eventualmente arribara al lugar, lo que aparentemente ocurrió, ya que no se localizó la totalidad de la osamenta de la pasivo. Por otro lado, es evidente el ánimo del acusado para mantener su impunidad sobre el hecho cometido, puesto que ****, al cuestionarlo sobre el paradero de la pasivo, le manifestó que había huido con otra persona.

Así, al analizar las peculiaridades del acusado, la naturaleza de la acción, la forma de intervención del agente, así como el daño al bien jurídico tutelado por la norma, este Tribunal considera que el acusado ****, representa para la sociedad un grado de culpabilidad superior al medio, y acorde al grado de punibilidad atribuido, en términos del artículo 126 en relación con el 125 del Código Penal, se le imponen CINCUENTA AÑOS DE PRISIÓN. Pena que deberá compurgar en la Institución que determine la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, quien en coordinación con el Juez de Ejecución, ejercerá las facultades de ejecución, en los términos de los artículos 1, 12, 16, 22 y 53 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad; en el entendido de que a la pena privativa de libertad se deben abonar TRESCIENTOS CATORCE DÍAS que padeció detención (del veinte de junio del año dos mil nueve al veintinueve de abril del año dos mil diez) con motivo de estos hechos, antes de ser puesto en libertad por Jueces del Tribunal

Oral, cuya determinación fue revocada por los Magistrados de las Salas Penales Regionales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca C 04/2010, de su índice.

No pasa desapercibido para este Órgano jurisdiccional, que tanto, el Agente del Ministerio Público, como la Acusadora Coadyuvante, refieren que por género, nos encontramos ante un feminicidio, y por tal motivo y la minoría de edad de la víctima, debe imponerse al acusado la pena privativa de libertad de sesenta años. Sin embargo, este Tribunal, comulga parcialmente con los exponentes, ya que efectivamente el cardinal 126 en relación con el 125 del Código Penal, establecen una pena mayor cuando en el homicidio, la víctima es de sexo femenino o menor de edad, empero, dichas particularidades no son suficientes para establecer el quantum máximo de la sanción invocada, ya que atendiendo a lo dispuesto por el cardinal 5 del ordenamiento en consulta, toda pena debe ser proporcional al delito que sancione, al grado de culpabilidad del sujeto y al bien jurídico afectado, es decir, que este Órgano Colegiado, atento a los principios de culpabilidad y proporcionalidad, únicamente puede imponer las sanciones dentro de los márgenes mínimos y máximos establecidos por el legislador, quien, en el particular, ya había tomado en consideración la circunstancia de género y edad para aumentar la pena en el injusto de homicidio, cuando éste se produce contra una mujer o un menor de edad. De ahí que no podamos resolver en la forma solicitada.

Tampoco se soslaya que la defensa argumenta que no es legal la celebración de la audiencia de individualización de sanciones, ya que el artículo 382 del Código de Procedimientos Penales, contempla la presencia necesaria del acusado. Sin embargo, tal argumento es ineficaz para restar valor a las actuaciones de este Órgano Jurisdiccional, ya que la citada audiencia se verificó como corolario de la resolución de la Sala de Casación, una vez que invalidó la sentencia absolutoria que se había emitido a favor de ****, y en su lugar pronunció sentencia condenatoria y ordenó la realización de la audiencia de individualización de sanciones, para el efecto de imponer el quantum de la pena; por lo que, la incomparecencia del imputado debemos considerarla como su renuncia al derecho que le corresponde de estar presente, sin que ello conlleve a la violación de derechos fundamentales,

ya que las pruebas a desahogar en la multitudada audiencia, fueron hechas del conocimiento de ****, en la audiencia intermedia, quien además fue representado para todos los efectos, por su defensor, tal y como lo dispone el artículo 7 del Código de Procedimientos Penales, que señala, en lo que importa, que los derechos y facultades del imputado podrán ser ejercidos directamente por el defensor.

En otro orden de ideas, de conformidad en lo dispuesto por los artículos 40, 43, 44, 45, 46 y 48 del Código Penal, en relación con el Numeral 500 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, se condena al acusado:

I.- A pagar por concepto de indemnización, a favor de **** (hija de la víctima, según se desprende de la documental publica consistente en el acta de nacimiento de la citada beneficiaria, que por lectura fue incorporada a la audiencia de individualización de sanciones), a través de su representante, la señora ****, la suma de TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL, que equivale a setecientos treinta días de salario mínimo vigente en esta zona económica al ocurrir el evento, el cual era de cincuenta y dos pesos con cincuenta y nueve centavos moneda nacional.

II.- Así mismo, se condena al acusado a pagar por concepto de gastos funerarios a favor del Gobierno del Estado, la suma de ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS Y UN CENTAVO MONEDA NACIONAL, por ser ésta la erogada con motivo de la inhumación del cadáver de la víctima, según consta en las facturas 11358 y 7863, expedidas por ****, respectivamente, y a las cuales debemos conceder eficacia probatoria al haber sido incorporadas en términos de lo dispuesto por el cardinal 366 del Código de Procedimientos Penales y reconocidas ante este Órgano Jurisdiccional, por el representante de dichas empresas.

En otro orden de ideas, se absuelve al acusado del pago de la Reparación del Daño Moral que solicita la Representación Social y la Acusadora Coadyuvante, pues aunque es verdad que el artículo 20 apartado C fracción IV de la Constitución Federal, señala que el juzgador no podrá absolver al sentenciado de la reparación del daño si ha emitido una sentencia condenatoria, cierto es también que para que

dicha sanción económica proceda, la misma, atentos a lo dispuesto por el artículo 14 de la citada Ley Suprema, debe ser solicitada con las formalidades esenciales del procedimiento, en específico, las contempladas en el Código de Procedimientos Penales, en sus artículos 287 fracción I, 294 fracción IX y 315 fracción II. Circunstancia que en la especie no acaeció, ya que el Representante Social, al cierre de la investigación, debió, en su pliego acusatorio, definir concretamente el daño moral que, en su caso, consideraba se había causado a la víctima u ofendido, para que el Juez de Garantía que verificó la audiencia intermedia, estuviera en aptitud de señalar en su auto de apertura a Juicio Oral, las acusaciones que deberían ser objeto del juicio, y por ende, el que la Fiscalía, haya enmendado sus pretensiones hasta la audiencia de individualización de sanciones, vulnera el señalado numeral 14 de nuestra Carta Magna, puesto que genera indefensión al imputado, al introducir un tema que no fue materia de la acusación, y por tanto, no podemos acoger la pretensión de la Fiscalía, ya que este Órgano Colegiado, no puede pasar por encima de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas a favor del acusado, y favorecer los derechos de la víctima, cuando éstos no fueron solicitados en tiempo y forma por la Representación Social.

En otro orden de ideas, es improcedente conceder a ****, el beneficio de la CONDENA CONDICIONAL, en virtud de que no se cumple el requisito establecido en la fracción I del artículo 86 del Código Penal, pues además de la penalidad, el delito por el que se le condena está contemplado en el numeral 70 fracción V de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que impide concederle el beneficio aludido.

No se condena a parte alguna al pago de los gastos del proceso, ni indemnización a favor del sentenciado, en virtud de que no se acreditó ninguna de las hipótesis a que se refieren los artículos 67, 69 y 71 del Código de Procedimientos Penales, ni fue solicitado por las partes.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 18 fracción I, 21 fracción I, 29 fracciones I y VII, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 123, 125, 126 todos del Código Penal; 1º, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15,

17, 18, 19, 20, 21, 330, 331, 332, 333, 334, 374, 376, 378 y 379 del Código de Procedimientos Penales:

POR UNANIMIDAD, ESTE TRIBUNAL RESUELVE:

PRIMERO: ****, ya individualizado, fue declarado por el Tribunal de alzada, penalmente responsable del delito de HOMICIDIO previsto y sancionado por el artículo 123 en relación con los numerales 126 y 125 del Código Penal, cometido en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de ****, según hechos ocurridos durante las ultimas horas del día veintinueve o primeras horas del día treinta del mes de agosto del año dos mil ocho en esta ciudad.

SEGUNDO: Por su referida conducta, se impone al acusado CINCUENTA AÑOS DE PRISIÓN. Pena que deberá compurgar en la Institución que determine la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, quien en coordinación con el Juez de Ejecución, ejercerá las facultades de ejecución, en los términos de los artículos 1, 12, 16, 22 y 53 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad; en el entendido de que a la pena privativa de libertad se debe abonar TRESCIENTOS CATORCE DÍAS que padeció detención (del veinte de junio del año dos mil nueve al veintinueve de abril del año dos mil diez) con motivo de estos hechos, antes de ser puesto en libertad por Jueces del Tribunal Oral, cuya determinación fue revocada por los Magistrados de las Salas Penales Regionales del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en el tomo C 04/2010, de su índice.

TERCERO: Se condena al acusado a pagar por concepto de indemnización, a favor **** (hija de la víctima), a través de su representante, la señora ****, la suma de TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL; así mismo, se condena al acusado a pagar por concepto de gastos funerarios a favor del Gobierno del Estado, por conducto de su representante legal, la suma de ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS Y UN CENTAVO MONEDA NACIONAL.

CUARTO: Se NIEGA a **** el beneficio de la CONDENA CONDICIONAL, en virtud de que no se cumple el requisito establecido en la fracción I del artículo 86 del Código Penal, pues además de la penalidad, el delito por el que se le condena está contemplado en el numeral 70 fracción V de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que impide concederle el beneficio aludido.

QUINTO: No se condena al pago de los gastos del proceso, ni indemnización a favor del sentenciado.

SEXTO: Una vez que cause ejecutoria esta resolución, dese cumplimiento al artículo 53 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, así como a lo dispuesto por el numeral 20 de la Ley Reguladora de la Base de Datos Genéticos para el Estado de Chihuahua.

SÉPTIMO: Remítase copia certificada de la presente resolución a la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y, en su caso, al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

OCTAVO.- Se absuelve a **** del pago de la reparación del daño moral.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. ASÍ LO RESOLVIERON POR UNANIMIDAD Y FIRMARON LOS INTEGRANTES DE LA SALA DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL, DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, INTEGRADA PARA VERIFICAR LA AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES, POR LOS LICENCIADOS MARÍA CATALINA RUIZ PACHECO, EMMA TERÁN MURILLO y JESÚS MANUEL MEDINA PARRA.